

Los empresarios en la campaña presidencial de 1988

Alicia Ortiz Rivera

Después de haber sufrido un serio deterioro por las políticas “populistas” y las tendencias a fortalecer el papel del Estado en la economía nacional que caracterizaron a las administraciones de los expresidentes Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), y que llegaron a su punto más álgido con la nacionalización de la banca, las relaciones gobierno-empresarios, sin haber llegado nunca a un rompimiento total, presentaron en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid cambios sustanciales que se tradujeron en un fortalecimiento de sus nexos e intereses comunes.

Asimismo, dentro del sector empresarial se pudo ver durante este periodo —aunque en forma velada—, la posición relevante que adquirió un reducido número de hombres de negocios, el cual consolidó su capacidad de ejercer el poder tras la silla presidencial. Capacidad que le da la posesión de las más importantes e influyentes —a nivel económico y político— riquezas del país.

De estos seis años se dio cuenta en el VI y último Informe de Gobierno, documento que si bien presentó datos ambiguos y “maquillados” sobre la crítica realidad que vive el país, fue calificado de “serio”, “realista”, “objetivo” y hasta “sensacional” por algunos prominentes representantes de la “cúpula” empresarial, tales como Prudencio López, Agustín Legorreta y Miguel Alemán, los tres integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y Vicente H. Bortoni y Jorge Kahwagi Gastine, presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), respectivamente.

Los cambios de fondo no sólo se dieron a nivel de las élites que controlan el poder, sino que trascendieron a grandes núcleos de la población que, a

través de su voto emitido el 6 de julio pasado, engrosaron en una forma sin precedentes, por su rapidez y magnitud, las filas de una oposición pujante, cuya capacidad de consolidación y crecimiento aún no muestra límite por el decidido apoyo popular que sostiene, aunque en principio tiende a avanzar hacia la integración de una nueva agrupación política, como lo anunció el ex candidato del Frente Democrático Nacional a la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas, durante la manifestación que se realizó en el Zócalo el miércoles 14 de septiembre¹.

Los organismos de la iniciativa privada, a través de sus más destacados representantes, desplegaron en este último sexenio una intensa actividad política e ideológica. Sin embargo, en el quehacer empresarial fue difícil definir hasta qué punto se ubican los intereses económicos y hasta dónde los políticos, más aún durante un sexenio que presentó fenómenos interesantes como el fortalecimiento de la oposición de izquierda, el desplazamiento de la derecha, representada por el Partido Acción Nacional, de segunda a tercera fuerza política, y la clara identificación de una parte importante del empresariado, incluida la más poderosa, económicamente hablando, en las filas del Partido Revolucionario Institucional, o bien colaborando en forma indirecta con éste, cuando tradicionalmente se ha identificado al sector como panista por sus afinidades ideológicas con este partido que, precisamente, lanzó como candidato a la Presidencia de la República a un connotado exdirigente empresarial, Manuel J. Clouthier, quien estuvo al frente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confe-

deración Patronal de la República Mexicana.

El sentido del cambio en la apreciación de las relaciones gobierno-empresarios, fue concebido por la parte más conservadora y reaccionaria del sector empresarial --representada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), y la COPARMEX--, como una actitud a la que se vio obligado el gobierno ante la magnitud de la crisis económica. Al respecto, el presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, declaró que la administración que encabezó De la Madrid se vio inmersa "en una dualidad contradictoria". Cuando dio a conocer sus puntos de vista sobre el último Informe, el dirigente afirmó que este gobierno trató, en primer lugar, de poner en marcha una reforma estructural "de corte intervencionista", externada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sin embargo, hubo "impedimentos prácticos que evitaron que se llevara adelante esta política. Esto se impidió debido a que el Gobierno tuvo que ceder, a su pesar, dando paso a una política menos agresiva en su *intervencionismo*, porque careció de suficientes recursos económicos para implementarla. Incluso adoptó algunas acciones de liberación del mercado, ante la imposibilidad de mantener el control del mismo".

Dijo entonces García Suárez que ante las posibilidades reales de la economía, "la situación no ofrecía alternativa. No existían los márgenes de maniobra necesarios para continuar con una política de intervencionismo estatal creciente e indiscriminado, que buscaba resolver todo por la vía del gasto público".²

¹ *Unomásuno, La Jornada*, jueves 15 de septiembre de 1988, primera plana.

² Discurso de Eduardo García Suárez durante el Desayuno Comunitario de la Cámara Nacional de Comercio de León, Gto, el 6 de septiembre.

Sin embargo, estas declaraciones emitidas por un representante empresarial, poblano, que constantemente ha dado muestras de su filiación panista, sirvieron también para exhibir las diferencias no tanto ideológicas como estratégicas que han demostrado las organizaciones empresariales en la pugna por la imposición del modelo de libre mercado por el que presionan, al que han dado en llamar “economía social de mercado”, mismo al que tendió la administración de De la Madrid.

Para los empresarios que detentan el poder económico en el país, es más importante mantener la “estabilidad social” que garantice la rentabilidad de sus capitales. Los grupos oligarcas apoyan al PRI “para que este partido no pierda el control político del país, pero también para asegurarse de que la estrategia en materia económica responda a la lógica del propio capital. Es decir, dado que la ganancia extraordinaria vía crisis se estaba agotando, los grandes empresarios negocian en el Pacto de Solidaridad Económica cómo crecer, quién va a encabezar el crecimiento y en qué condiciones. La burguesía se siente con la capacidad política, económica y administrativa para liderar el desarrollo del país; eso es lo que exige a cambio del respaldo otorgado al grupo en el poder”.³

El Partido Revolucionario Institucional: estructura política en que se consolidan los nexos gobierno-empresarios

A pesar de que el PAN continúa siendo un bastión empresarial que se identifica con los sectores más

conservadores y reaccionarios de la sociedad, y específicamente de la iniciativa privada, el pasado proceso electoral fue un factor más que evidenció las dos tendencias principales que dominan al interior del empresariado mexicano. El contenido y tono de las declaraciones de sus dirigentes patronales y de los comerciantes mostró fehacientemente su inclinación panista. Por una parte se negaron a reconocer, a diferencia de otros líderes empresariales, el triunfo anticipado e ilegalmente declarado del candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, a la vez que insistieron en que se aclararan las impugnaciones que pusieron en entredicho la legitimidad del proceso, apoyaron las acciones de “resistencia civil” encabezadas por el candidato del PAN, Manuel Clouthier, y desataron una ola de declaraciones en contra de Cuauhtémoc Cárdenas.

El dirigente de la CONCANACO, Eduardo García Suárez, quien desde su toma de posesión se destacó por la virulencia de sus declaraciones y por su insistencia, al igual que el presidente de la COPARMEX, Jorge Ocejo Moreno —también poblano—, en sostener que hablan a nombre “del pueblo”, manifestó semanas después de las elecciones que “el pueblo de México ha demostrado un profundo rechazo a las tesis populistas y socialdemócratas, y se inclina por un régimen centro-pluralista”, éste último al que ellos identifican como la propuesta del PAN.

En sus declaraciones emitidas en Miami, Florida, durante el IX Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas, este representante agregó que “nos preocupa el que a través de una bien organizada campaña de gacetillas en los medios de comunicación internacionales, se quiera hacer creer que en las pasadas elecciones el pueblo mexicano dio el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, un claro representante del populismo socialista,

³ Nota de José Ignacio Rodríguez Reyna, publicada en *El Financiero*, el 9 de junio de 1988, p. 16.

tendencia ideológica que sumió a México en su más profunda crisis económica y política. En realidad, dijo, el Frente Democrático Nacional no es más que un desgajamiento del Partido Revolucionario Institucional, desprendimiento que se dio ante la imposibilidad de seguir manteniendo las políticas populistas llevadas hasta entonces”.

Este “líder” no desaprovechó ocasión para exponer la reaccionaria actitud que ha sostenido este sector históricamente, y días antes señaló que “hay quienes han levantado nuevamente y convertido en populares las políticas que se iniciaran en los 70, y que tienen su inspiración remota en el sexenio socializante de Lázaro Cárdenas. Ellos están presionando. No sólo han desmitificado a la figura presidencial, sino que tienen el propósito de apoderarse de ella para provecho propio y de sus doctrinas fracasadas”.

Y en éste que fue uno de sus más representativos alegatos, remató diciendo que “el neocardenismo sin una figura como Cárdenas pretende apoderarse de un lugar que realmente no tiene en la sociedad mexicana, pues sin negar que tienen un sector social que los apoya, tampoco ignoramos que parte de los supuestos votos que esgrimen a favor proceden de los mismos vicios de la llamada cultura del fraude electoral”.⁴

El sector “conciliador” del empresariado, representado por los dirigentes de la CONCAMIN y la CANACINTRA, así como el grupo oligarca que ha dado pruebas claras de su influencia en el gobierno y que es a su vez representado por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), y por la

cabeza visible del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Agustín F. Legorreta Chauvet, mostró en diversas ocasiones, a diferencia del sector antes descrito, su decidido apoyo al PRI. Aun antes de la calificación de las elecciones por el Colegio Electoral, mostraron su beneplácito por las triunfalistas declaraciones de los dirigentes del partido oficial, y no vacilaron en declarar que pese a la fuerte presencia de la oposición, Carlos Salinas “no será un presidente débil”.

Asimismo, fue notable la presencia de prominentes hombres de negocios a lo largo de la campaña salinista. Su participación activa avaló su apoyo a un sistema que, durante este sexenio, aplicó políticas económicas que paso a paso demostraron haber sido diseñadas para satisfacer los intereses de esta élite gobernante, cuyo poder se consolidó aun cuando en momentos en que la crisis económica, y uno de sus principales indicadores, la inflación, cayó casi en el descontrol, el gobierno llamó a la “concertación” enmarcada en el Pacto de Solidaridad Económica, cuya paternalidad se la atribuyó este grupo, aun cuando firman los acuerdos también los sectores obrero y campesino.

El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, integrado por una treintena de influyentes empresarios, dejó ver su poder al gozar del “privilegio” de analizar detalladamente la capacidad y probidad de quienes asignó en su momento Miguel de la Madrid (¿o el PRI?) como “distinguidos priístas” precandidatos a la Presidencia de la República, a través de reuniones privadas con cada uno de ellos. Distinción que no tuvo ninguna otra organización de ningún otro sector, y cuyo contenido se filtró parcialmente a la prensa.⁵

⁴ Discurso de García Suárez durante el IX Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas, en Miami, Flo, el 18 de septiembre de 1988.

⁵ *El Universal*, col. Pasarela política, 9 de mayo de 1988.

La cerrada estructura corporativista del PRI, y su teórico apego a los "principios revolucionarios" que lo sustentan, han impedido dar cabida formalmente a un sector empresarial en su interior, sin embargo, esto no ha sido obstáculo para permitir una creciente participación de prominentes empresarios en sus filas, tanto como candidatos a puestos de elección popular, como fue el caso de Juan José Moreno Sada, quien a unos cuantos días de haber dejado el cargo de presidente de la CANACINTRA fue lanzado como candidato a diputado por el distrito de Tuxtepec, Oaxaca, de donde es oriundo, o bien el de Julio Millán Bojalil, presidente del grupo Consultores Internacionales de Asesoría Económica, quien dio a conocer las estrechas relaciones que en su calidad de economista ha sostenido con Carlos Salinas de Gortari, y quien además resultó perdedor frente al candidato del PAN en el VI distrito electoral de la ciudad de México.

Otros casos destacados de militantes empresarios en el PRI son los de Alfonso Pandal Graff, ex-presidente de la CONCAMIN; Claudio X. González, a quien se le ubicó como nexo entre los grupos empresariales y el candidato priísta, labor a la que se dedicó casi íntegramente después de haber dejado la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en manos de Agustín Legorreta, y quien es además miembro del CMHN. La participación de Claudio X. González durante la campaña le valió el nombramiento de titular de la Comisión de Inversiones Extranjeras, que fue una de las que integró Salinas de Gortari para analizar lo que serían sus programas de gobierno, e incluso su nombre sonó fuerte como miembro del próximo gabinete presidencial.

José de Jesús Padilla, destacado industrial zapatero de León, resultó electo senador por Guana-

juato. Silvestre Fernández Barajas y Jacobo Zaidenweber, ambos expresidentes de la CONCAMIN, y este último presidente en funciones de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, forman parte del grupo de consultores del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI, en tanto que Carlos Slim, miembro del CMHN, y Carlos Mireles, expresidente de CANACINTRA y ex-vicepresidente de la CONCAMIN, figuran entre las listas de militantes activos del partido oficial, al igual que Alfredo Santos, dueño de las ópticas Lux.

Sobre la apertura que se dio en el PRI para permitir la militancia abierta de representantes empresariales, habló Silvestre Fernández Barajas. El nombre de este expresidente de la CONCAMIN también "sonó" fuerte como posible candidato a alguna diputación, sin embargo esto no prosperó. Cuatro semanas después de las elecciones, Fernández Barajas declaró que en México "la inmensa mayoría de los empresarios somos priístas"; y explicó que la estructura corporativa del partido oficial en nada limita la militancia de este sector. Se refirió a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) como un ámbito "extraordinariamente elástico" en el que cabe todo género de militantes.

Hizo eco de otros empresarios priístas en el sentido de que los hombres de negocios que militan en el PRI "no lo hacemos bajo ninguna etiqueta, sino como ciudadanos con deseos de participar y manifestarnos en las diversas formas permitidas en la sociedad", a la vez que reconoció que hay graves fracturas al interior del partido, sin embargo, para él, ese instituto político "no ha perdido su excelente estructura. Afinarla será un gran reto, así como convencer que el programa de este partido

tiene viabilidad y es para hacer crecer y desarrollar a México". Entre los principales reconocimientos que el expresidente de la más importante organización de industriales del país hizo a la administración de Miguel de la Madrid, destacó el de haber "dignificado la figura presidencial" y haber tomado la "decisión seria" de abandonar el populismo.⁶

Sin embargo, ya fuera del ámbito estrictamente partidista, las relaciones PRI-Gobierno-oligarquía empresarial tiene raíces más profundas. Así lo dejó entrever el presidente en funciones del CCE, Agustín Legorreta, durante una conferencia privada que dio el 17 de mayo de 1988 en la Universidad Anáhuac, en la que detalló las negociaciones que tuvo el gobierno con la élite empresarial, integrada según dijo por 300 poderosos empresarios que controlan la economía mexicana, con los que se establecieron acuerdos no escritos, pero implícitos en el Pacto de Solidaridad Económica, que garantizarían a este grupo "la voluntad política" del gobierno de sanear sus finanzas.

Entre tales acuerdos destacó la decisión de llevar a la quiebra o vender empresas de "significación nacional", como fue el caso de Aeroméxico y la Compañía Minera de Cananea, acciones que si convencen a los "cúpulas", como el mismo Legorreta se autodefinió, de que se avanza en la reducción del déficit público y, sobre todo, en la reprivatización de la economía para limitar al máximo la participación estatal en este ámbito.

Calificó la participación de los demás sectores en el PSE como "música de acompañamiento" y elogió la capacidad del empresariado de haber convencido al gobierno de que la inflación es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno, pues

la alimenta con su déficit público, en tanto que ellos, los empresarios, sólo encarecen como un acto de "legítima autodefensa".

Entre otras cosas destacó en aquella ocasión las ventajas que para la estructura oligopólica de la economía mexicana representan el mantenimiento de un sistema presidencialista, con el que esa élite puede negociar "cómodamente", y en un alarde de prepotencia manifestó que una vez que el presidente, cabeza de un sistema de tales características, había negociado con ellos, ya podía "enredarse en la bandera y lanzarse diciendo que logró abatir la inflación", pues una vez controlado este fenómeno, disminuyó sensiblemente su riesgo de perder el poder, "y mantenerlo es lo único que les interesa" (al gobierno).⁷

Ésta y otras declaraciones dan cuenta de que tales nexos se intensificaron más a raíz de la firma del PSE. El control que esas 300 empresas tienen de la economía nacional es una realidad. De hecho, fueron las firmas que encabezaron las "concertaciones" con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), para "reducir los precios en los términos del PSE". También es un hecho su estructura oligopólica. La apertura comercial, supuestamente acelerada con el fin de combatir la inflación en el marco de este programa de estabilización, en nada alteró el control que estos consorcios tienen del mercado interno. Por el contrario, fortaleció sus cadenas distributivas, importadoras y exportadoras, a la vez que causó sensibles daños a miles de pequeñas y medianas empresas que se vieron imposibilitadas para competir en tales condiciones.

De esta problemática dieron cuenta la CON-

⁶ *Unomásuno*, 10 de agosto de 1988, p. 7.

⁷ *Unomásuno*, 19 de mayo de 1988, pp. 1 y 14.

CAMIN y la CANACINTRA, a través de análisis y declaraciones en los que demostraron que la decisión de acelerar la apertura se tradujo en un incremento indiscriminado de importaciones de productos no necesarios, y en no pocos casos defectuosos, que han desplazado a la producción nacional. Los organismos antes mencionados llegaron al grado de manifestar que la industria nacional no soportará este ritmo de apertura en el próximo año.

Pero volviendo a las estrechas relaciones que tiene el gobierno con el grupo oligarca, encontramos que analizando la estructura de los consejos de administración de las más representativas empresas que controlan los miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en algunas de ellas figuran los nombres de importantes funcionarios públicos. Tal es el caso de Ernesto Fernández Hurtado, director de Bancómer y consejero de Celanese Mexicana, al igual que Ernesto Marcos Giacoman, director de Nafinsa, quienes participan en ese consorcio junto con Agustín Legorreta. Lo mismo sucede con el director general de Banamex, Fernando Solana Morales, quien forma parte del Consejo de Administración del Grupo Condumex, en el que además de Legorreta también intervienen Prudencio López y Agustín Santamarina, ambos miembros del CMHN. Asimismo, Julio Moctezuma Cid, director de Somex, participa en el grupo Indetel y en la Sociedad de Inversión Privada PRIME.

Estos son sólo algunos casos de la participación de funcionarios públicos en empresas privadas, pero también destaca la intervención de representantes empresariales, concretamente miembros del CMHN, en los consejos de administración de empresas públicas, como sucede con Mexicana de Aviación, en la que figuran como consejeros Aarón Sáenz Couret, Antonio Ruiz Galindo y

Alberto Bailleres, o bien Teléfonos de México, en donde están integrados Agustín Legorreta, Adolfo Patrón Luján y también Antonio Ruiz Galindo.⁸

No es difícil ver las ventajas que tan estrecha colaboración pueden representar para ambas partes en materia de créditos, financiamiento, concesiones diversas y estrategias diversas apoyadas en el manejo de información privilegiada.

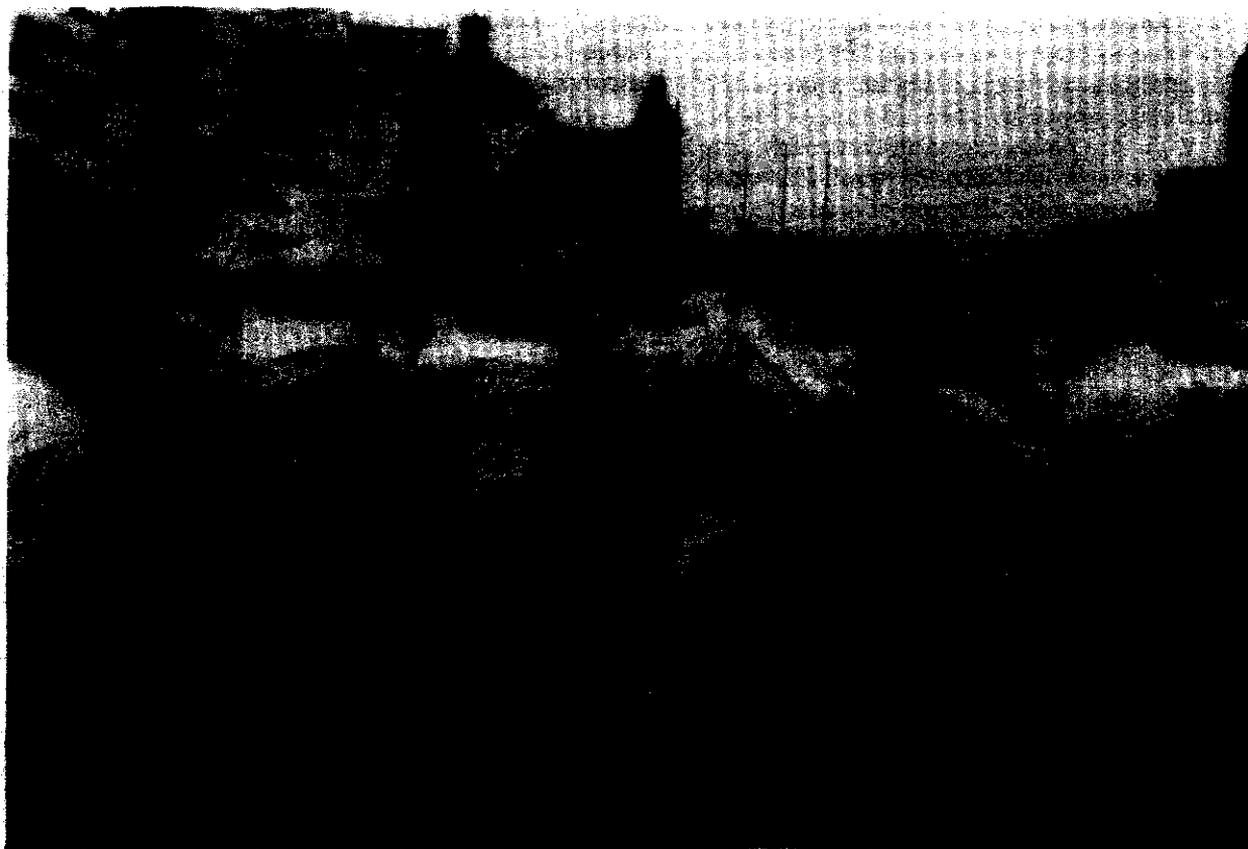
Los sucesos del mercado bursátil, que derivaron en la denuncia de un fraude millonario cuya responsabilidad aún no se esclarece, tuvieron como base el acceso a información privilegiada por parte de los controladores de las casas de bolsa. Por lo menos así se interpretó cuando, meses después, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación dio a conocer un acuerdo que limita la participación de funcionarios públicos en este mercado, considerando "que algunos servidores públicos de la Administración Pública Federal, por razón de su encargo, tienen acceso a información que no es del conocimiento público y que pudiera determinar sus decisiones de inversión en el mercado de valores, y que esas decisiones pueden crear conflictos de intereses, además de que pueden afectar el desarrollo ordenado del propio mercado, cuyo funcionamiento es de interés público".⁹

Con la publicación de este ordenamiento se pretendió dar una última pincelada de "moralización" a la administración saliente, sin embargo, los resultados no trascendieron.

Otra abierta expresión del maridaje gobierno-empresarios, y más específicamente de los grupos oligarcas, quizá la más descarnada, es la evolución

⁸ *Unomásuno*, rep. de Juan Antonio Zúñiga, Luis Acevedo y Alicia Ortiz; 4, 5 y 6 de septiembre de 1988.

⁹ Secretaría de la Contraloría General de la Federación, agosto de 1988.



Protesta de la Corriente Democrática, Sindicato SEDUE, mayo 1988.
Foto: Ileri de la Peña

que muestran los principales indicadores del comportamiento económico y la situación social en el periodo 1982-1988, y el contraste que representa la consolidación y enriquecimiento de poderosos grupos empresariales, cuyas ganancias crecieron a la par que la inflación y aun más.

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid el poder adquisitivo del salario cayó en 55% ; el desempleo abierto creció en más de 8% , dejando a más

de 10% de la población económicamente activa (PEA) sin ocupación. De hecho, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, perteneciente al CCE, actualmente la planta productiva sólo tiene capacidad para ocupar al 43% de la PEA. Al cierre de esta administración el número de desempleados abiertos en el país superará los seis y medio millones de personas, según datos de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Los indicadores del deterioro nutricional de amplios sectores de la población muestran una realidad aún más cruda. Por ejemplo, se estima que en los últimos seis años el consumo per cápita de carne disminuyó 45.1% , el de leche en 12.7% , de maíz 28.1% , de frijol bajó 13.5% y de frutas como plátano y naranja decayó 28.4% , por mencionar sólo algunos.¹⁰

Los “esfuerzos” del sector empresarial durante este sexenio no fueron vanos. Constantemente presionaron para que el gobierno disminuyera su gasto público; para que el Estado se deshiciera del sector paraestatal y ampliar aún más su poder en la conducción económica del país; para que se mantuviera nuestra moneda subvaluada y mantener la “competitividad” de las exportaciones de sus empresas en el exterior.

El deterioro salarial fue un pilar fundamental en el sostenimiento de esta política económica, que a grandes pasos consolidó el poder de la oligarquía gobernante. Incluso funcionarios públicos, además de representantes empresariales, no vacilaron en ofrecer a inversionistas extranjeros la “ventaja comparativa” que para ellos representa la mano de obra barata mexicana, en particular para la promoción de empresas maquiladoras en la frontera norte y al interior del país.

El apoyo que el sector empresarial dio a la política que en materia de deuda externa mantuvo la administración de De la Madrid: pagar aun a costa del estancamiento y franco retroceso económico, fue ilimitado, pues en nada mermó sus ganancias. Ellos tienen el poder económico y en nada han dejado de usar sus armas de presión, que son

básicamente retener las inversiones, el consecuente desempleo y, sobre todo, fugar los capitales.

Al respecto, el director de Banamex, Fernando Solana Morales, informó que en junio los depósitos de mexicanos en el exterior ascendía a 40 mil millones de dólares, monto superior al que maneja el sistema financiero nacional en su conjunto. Adicionalmente, la Bolsa Mexicana de valores dio a conocer que más del 60% de los Certificados de la Tesorería, principal instrumento de financiamiento del sector público, está en manos de esos particulares. Esto es, no sólo controlan el grueso de los recursos del sector productivo, sino incluso la propia deuda interna del gobierno.

Para un gobierno de corte neoliberal como lo fue el de Miguel de la Madrid Hurtado, no fue difícil ceder a las presiones empresariales. De hecho, quizá sea inexacto llamarlas así, porque en la instrumentación de su política económica más bien operaron como acuerdos cuya vigencia o continuidad, como le dieron en llamar, garantiza la llegada de Carlos Salinas al poder.

Por eso no han vacilado en apoyar a un presidente cuya llegada al poder se dio en un contexto que dejó en entredicho su legitimidad, pues fue claro el rechazo de amplios sectores de la población. A pesar de ello, ya desde su campaña, Salinas de Gortari aprovechó varias ocasiones para refrendar su compromiso de “colaboración” con este grupo de empresarios. Destacó por su contenido el discurso que pronunció en Monterrey, cuna de los grupos oligarcas.

Ahí, ante la representación de la “cúpula” empresarial, Salinas de Gortari expuso que “tenemos un proyecto económico que se fortalece con la decisión del empresariado nacional de invertir a largo plazo. Un saldo positivo de la crisis ha sido

¹⁰ Calva, José Luis, *La crisis agrícola y alimentaria en México*, p. 46.

la remodelación de la cultura empresarial, que abandonando esquemas superados de especulación y de protección, está dispuesto a afrontar los retos internos y externos de la modernidad económica. Sin la participación comprometida de los empresarios es imposible consolidar la base productiva de la nación.

“Apoyaré firmemente al empresariado mexicano que manifieste una renovada cultura industrial. . . apoyaré con la fuerza de mi gobierno a los empresarios comprometidos con la nueva estrategia de inserción a las corrientes mundiales de tecnología y comercio. . . propongo una alianza estratégica con los particulares para la creación de consorcios empresariales exportadores de cobertura mundial, en la cual el Estado desempeñaría su función de apoyo a la investigación, comercialización y apertura de nuevos mercados. Ni Estado que subsidie ni Estado subsidiario: Estado promotor y firme aliado de las empresas mexicanas en la batalla por el comercio mundial. Los empresarios en esta nueva estrategia exportadora tomarán ries-

gos; les garantizo seguridad en sus personas y en sus bienes.”¹¹

La nueva realidad política del país abre nuevas interrogantes: ante el evidente descontento popular, ¿hasta qué punto podrá sostener la nueva administración un proyecto de política económica que privilegia básicamente los intereses de este sector empresarial?

Frente al deterioro económico y social de la mayor parte de la población mexicana, ¿es verdaderamente viable el proyecto de desarrollo propuesto por Salinas de Gortari?

Una vez que concluya la cuarta fase del Pacto de Solidaridad Económica, ¿de qué forma se mantendrá el control de la inflación y se garantizará la recuperación de los niveles de vida de los mexicanos?

Hay muchos cuestionamientos y es indudable que en las respuestas que dé el gobierno también se deberá considerar la nueva presencia de la oposición en las Cámaras, cuya participación, al igual que la de la sociedad organizada, tendrá mucho que aportar. 

¹¹ Discurso pronunciado por Carlos Salinas de Gortari, durante la reunión sobre el Reto Económico, en San Pedro de Garza García, Monterrey, N.L., el 19 de mayo de 1988.